

Pretensión Imposible, Reunir a Juárez y Zapata

Contradicciones del Sexenio

- ★ Neoliberalismo y Justicia Social no van Juntos
- ★ Empieza a Irse el Poder y las Críticas Aumentan
- ★ No Existe Vocación Democrática en Este Gobierno

LORENZO MEYER

El tema de la hora: V Informe presidencial. Logros ciertos (baja inflación, apertura económica), metas no logradas (crecimiento de 6% anual) e incongruencias evidentes (supuesta disminución de la pobreza e innegable concentración de la riqueza y el poder; multiplicación de superricos).

Finalmente, las contradicciones del sexenio, que quedan resumidas en los 2 héroes cuya memoria

SIGUE EN LA PAGINA CATORCE

Contradicciones del Sexenio

Signos de la primera plana

invocó el Presidente: Juárez y Zapata, pretendiendo conjugarlos como símbolos del liberalismo social del sexenio. Pero es una pretensión imposible, pues fue justamente la política de Juárez en el siglo XIX —esa que en nombre del liberalismo, destruyó la propiedad comunal— la que provocó que a principios del siglo XX, Zapata y las comunidades surianas se rebelaran contra el liberalismo económico en nombre del derecho tradicional y la justicia sustantiva. No, Juárez y Zapata no van juntos, como tampoco marchan juntos en este sexenio el neoliberalismo y la justicia social.

Concluido el rito del V Informe presidencial, el ciclo sexenal está a punto de llegar a su momento culminante. Una vez más, el presidencialismo se prepara para dar la muestra suprema de poder: la de designar e imponer, por sí y ante sí, al fiel colaborador que será ungido como el candidato presidencial del partido del Estado. Ahora bien, inmediatamente después de tan espectacular acto, el poder empezará a abandonar al Presidente saliente para purificarse de la escoria acumulada a lo largo de un lustro y volver a surgir, rejuvenecido, en la persona del siguiente Presidente.

Lo anterior, es el guión tradicional de la política sexenal mexicana. Hasta el momento, se ha cumplido cabalmente. Sin embargo, existe la posibilidad de que en esta ocasión sufra alteraciones, pues ya no es absolutamente seguro que el ungido por la voluntad presidencial será en 1994 el nuevo Presidente. Pero no nos adelantemos, por el momento, lo que podemos constatar es que la tradición se mantiene: al concluir el quinto año de gobierno, el brillo del sexenio empieza a menguar, y rápidamente. Las dudas y críticas empiezan a aflorar incluso en medios que hasta hace poco eran apoyos casi incondicionales del gobierno. Y uno de los puntos en que convergen esas críticas, internas y externas, es el de las insuficiencias democráticas del salinismo.

En 1988, y ante la incapacidad del sistema mexicano de enfrentarse a elecciones competidas y ofrecer resultados creíbles, los actores externos con intereses en México —capitalistas y socialistas (que entonces vivían sus últimos momentos), demócratas y no tan demócratas, norteamericanos, europeos y latinoamericanos— cerraron filas en torno del presidencialismo mexicano y su

nuevo representante —Carlos Salinas— para protegerlo, otorgarle legitimidad y permitirle recuperar su eficiencia. Fue un ejemplo de *realpolitik* de la comunidad internacional: a los gobiernos extranjeros, organismos internacionales y empresas transnacionales, les resultaba ventajosa la preservación del viejo sistema político mexicano, pues todos tenían intereses creados en él.

De entre esos gobiernos e intereses que hace cinco años volcaron su apoyo en favor de Carlos Salinas y su grupo compacto de neoliberales, nadie se mostró tan entusiasmado como el gobierno, los empresarios, los académicos y los medios de información de Estados Unidos. Ese entusiasmo no tenía precedente desde la época de Miguel Alemán y las fallas de la democracia mexicana fueron excusadas en nombre del realismo y la modernización. Sin embargo, esa actitud está cambiando; la crítica al autoritarismo mexicano casi inexistente en el pasado, hoy, sin ser dominante, ya no es tan rara. Y no me refiero únicamente a los grupos que desde el inicio de la negociación del TLC se mostraron opuestos a incorporar a México a la "civilización norteamericana".

Un informe titulado "Reforma electoral en México" (El Financiero, 22 de octubre), fechado el 13 del mes pasado, y preparado por el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Electos que encabeza el ex Presidente James Carter, concluyó que en México aún no existen las condiciones necesarias que garanticen en 1994 una elección realmente democrática. ¿Las razones? Según el documento elaborado por los representantes de los ex Presidentes Carter, Oscar Arias y Raúl Alfonsín, son básicamente cuatro: a) falta de independencia del Instituto Federal Electoral, b) deficiencias en el padrón electoral, c) restricciones a los observadores electorales, y d) reformas electorales encaminadas más al reparto de curules entre el PRI y la oposición formal y real, que a dar credibilidad al proceso en su conjunto. El

informe concluye con los resultados de una encuesta hecha en México: 41% de los entrevistados consideraron que la elección de 1994 no va a ser limpia.

El poderoso formador de opinión entre las élites norteamericanas, el diario *The New York Times*, en un editorial publicado el 23 de septiembre pasado y dedicado al TLC, señaló que: "...con todo lo que el Presidente Salinas ha logrado en materia de reforma económica, él y su Partido Revolucionario Institucional siguen siendo un obstáculo para el establecimiento de una democracia efectiva

en México". Y añade: "En el contexto del PRI, el Sr. Salinas es un reformador. Sin embargo, en el contexto de la América Latina de hoy, México no es una democracia efectiva." En relación a las varias "reformas políticas" del salinismo, *The New York Times* concluye que son limitadas y no ofrecen grandes esperanzas para unas elecciones democráticas en 1994. Otro diario igualmente influyente, *Los Angeles Times* (5 de octubre), considera que el proceso del "destape" del candidato del partido del estado de México, es algo más parecido a una telenovela que a un proceso político propiamente dicho, y en cualquier caso, se trata de una fórmula "más propia de una monarquía medieval que de una supuesta democracia" (*La Jornada*, 6 de octubre).

Las que han tenido lugar en estos días en varios comités del Congreso norteamericano y audiencias relacionadas con el TLC, han dado lugar a afirmaciones que no ayudan a mejorar la imagen del gobierno mexicano respecto de los derechos humanos y al estado de derecho en general. Forzado por las circunstancias, por ejemplo, el subsecretario de Estado para Derechos Humanos, John Shattuck, debió de admitir el 26 de octubre que en México persiste la violación a los derechos humanos, debido a prácticas tales como "...el uso de la tortura, amplia brutalidad y casos de asesinatos extrajudiciales por parte de policías y una frecuente falta de castigo para los responsables". El representante de Amnistía Internacional fue aún más lejos, y declaró que la impunidad "continúa siendo la norma más que la excepción" por lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos en México (*El Financiero*, 27 de octubre).

La Iglesia católica es otro de los grandes aliados del sistema político mexicano actual de donde han salido algunas críticas. Tras el reconocimiento formal de la personalidad y los derechos de las iglesias por parte del gobierno de Carlos Salinas, éste recibió, en la práctica, algo que se parece al Real Patronato colonial, ese que permitía al poder político español, entre otras cosas, opinar en torno de la designación de los obispos. Los esfuerzos del embajador del Vaticano por quitar de Chiapas a un obispo que molesta al gobierno —Samuel Ruiz— es un ejemplo claro de la alianza con el gobierno, pero ello no evita la crítica.

Un ejemplo de lo anterior, es la carta que el obispo Manuel Talamás envió recientemente al Presidente Salinas y que aborda el problema de un sistema

electoral que el obispo califica como "vergonzoso para México ante el mundo" (*EXCELSIOR*, 5 de octubre). Al obispo Talamás le preocupa la existencia en México de un partido de Estado —lo compara con cachorro al que se domesticó, y ahora, ya crecido, es incapaz de valerse por sí mismo— y de un sistema político que no corresponde a las aspiraciones de unos mexicanos que "han crecido en conciencia cívica y en espíritu crítico y cada día rechazan más las repetitivas proclamaciones de democracia que a todas luces no son reales". El obispo acepta que la instauración de un auténtico sistema político democrático pueda llevar a acabar con el partido que ha dominado desde 1929, "como reacción instintiva por tantas y tantas veces que fue objeto de fraudes, de bur-las, de manipulaciones e imposiciones políticas". Pero si el poder no acepta correr ese riesgo, entonces estará corriendo otro: "que el descontento del pueblo se vaya intensificando aún más hasta convertirse en caldo de cultivo de formas más violentas de protestar".

Finalmente, pero no menos importante, está la posición recientemente adoptada por el Confederación Patronal de la República Mexicana. En el último número de su revista "Entorno", la Coparmex publica un documento titulado "Política mexicana hacia el año 2000"; se trata de un análisis de los cambios en el entorno internacional y nacional del sistema político mexicano y algunas de sus consecuencias. En ese documento se concluye que los esfuerzos de reconstrucción de las bases sociales de la élite "político-tecnocrática" que tomó el poder en 1982, han tenido un éxito parcial, y que montada en ese éxito, esa élite se propone conservar el poder más allá del año 2000. Sin embargo, ese ambicioso proyecto transexenal tiene enemigos internos y un gran talón de Aquiles: el espacio electoral. Hasta la fecha, dice Coparmex, el gobierno no ha logrado "el consenso mínimo en las reglas del juego", y sin ese

consenso es difícil impedir que la lucha electoral se transforme en una serie de conflictos que el sistema no pueda procesar de manera ordenada y pacífica.

En conclusión, es en los cambios de la sociedad mexicana, en la actividad de una oposición a la que el neoliberalismo no pudo destruir aunque lo intentó y en las presiones que están surgiendo dentro del grupo mismo de aliados del salinismo —los estadounidenses, la iglesia católica y los empresarios—, que se encuentra la explicación del pacto de civilidad que el Presidente Salinas acaba de hacer, aprovechando la tribuna que le brindó su V Informe de Gobierno. Ahí dijo: "Ofrezco, a las diversas fuerzas políticas y a los contendientes que participarán en la justa electoral de 1994, pleno respeto, apego a lo que establece la ley, y condiciones adecuadas para que, con total libertad, presenten sus opciones a los mexicanos... Convoco a la Federación, a los partidos políticos, a los grupos sociales, a todos los ciudadanos, a unirse en un esfuerzo comprometido para realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares; a asumir un pacto de civilidad en el marco de la ley".

La historia del salinismo no ofrece garantías en materia democrática. Ese grupo llegó al poder mediante unas elecciones que no fueron claras, transparentes ni ejemplares. Luego, un buen número de sus elecciones locales posteriores, tampoco fueron limpias. En fin, no hay vocación democrática en el salinismo. Sin embargo, a lo mejor ahora en él es una necesidad democrática debida al cúmulo de problemas y presiones que enfrenta. Está en el gobierno salinista dar credibilidad, con acciones concretas, a su oferta. No será tarea fácil, pero tampoco imposible. Entre tanto, a la sociedad mexicana y a los demócratas de todas partes, les corresponde seguir presionando para que la presidencia autoritaria no tenga otra alternativa que cumplir la oferta que acaba de hacer.